

El desafío de las ONG ambientalistas

La gestión ambiental está relacionada con el bienestar colectivo; especialmente, en el caso de los ciudadanos más pobres, porque son los primeros en recibir los impactos de una gestión acertada o no. El trabajo que durante más de cuarenta años han desarrollado las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas en Venezuela ha beneficiado no sólo a la ecología del país sino, también, a las comunidades menos favorecidas. Para ello se han valido de conocimiento científico, vocación, planificación estratégica, constancia y, para mantenerse en el tiempo, apoyo del Estado (gobiernos de turno, sector privado y membresía) y, sobre todo, de la cooperación internacional.

Ahora bien, a partir de la discusión del proyecto de Ley de cooperación internacional que discute la Asamblea Nacional, se percibe un escenario que amenaza la supervivencia de muchos proyectos. Para el sector oficial es necesario asegurar la transparencia de la gestión de algunos grupos ambientalistas, porque «no todas las ONG responden sobre sus cuentas, ni de su gestión», como dijo en conversación con *Debates IESA* el director de Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Jesús Manzanilla.

Una ley para la cooperación internacional

El proyecto de Ley de cooperación internacional fue sancionado en primera discusión el 14 de junio de 2006; actualmente es sometido a segunda discusión, revisión y consulta

El futuro de la protección ambiental en Venezuela luce complejo e incierto, en medio de la coyuntura sociopolítica actual y las nuevas leyes que se discuten. En este escenario, las organizaciones no gubernamentales ambientalistas deben reformularse para asegurar que sus proyectos sobrevivan.

ALBA MARINA GUTIÉRREZ

interna por parte de un equipo de asesores y diputados supervisados por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Roy Daza.

La publicación del proyecto de ley provocó una lluvia de cuestionamientos. Algunos titulares de prensa y noticieros estatales resaltaron que la nueva ley pone en peligro la existencia de las ONG. Mientras que diversos voceros de reconocidas organizaciones advirtieron que su contenido vulnera derechos fundamentales como los de asociación, participación, libertad y autonomía; en consecuencia, solicitaron un derecho de palabra en la Asamblea.

La ley tendrá competencia en todas las acciones y programas de cooperación internacional, desde el exterior hacia Venezuela y viceversa. Abarca la recepción, la transferencia y el intercambio de bienes, servicios y tecnología, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la formación de talento y los recursos materiales, económicos y financieros, de los ámbitos tanto público como privado. De ser aprobada, las ONG que quieran sobrevivir tendrán que ajustarse a los proyectos de desarrollo del Estado y a la política exterior del Gobierno; condición *sine qua non* para acceder a fondos de cooperación internacional.

El pasado mes de mayo Daza aseguró en sesión plenaria que «antes de sancionarse la ley, en la sede de la Asamblea Nacional,

se celebrará una consulta pública nacional en la que todos los interesados puedan hacer sus observaciones y aportes», y agregó: «Vamos a revisar el proyecto detalladamente y si nos tenemos que sentar para tales efectos con los compañeros de Cofavic (Comité de familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989), de Fe y Alegría o con cualquiera que tenga opiniones a favor o adversas al contenido de la ley, lo haremos, porque con los aportes se redundará en una normativa con peso político y con características excepcionales en un momento en que Venezuela requiere una Ley de cooperación internacional acorde con los tiempos».

El parlamentario subrayó que en Venezuela «existe una buena cantidad de instituciones que reciben cooperación

internacional» y fue categórico al señalar que «en efecto, la ley va a regular todo lo que tiene que ver con la actuación del financiamiento externo: establecerá control en el financiamiento. Pero debemos esperar la revisión para dar mayores detalles».

Según Isabel de los Ríos, doctora en derecho ambiental y docente de la Universidad Central de Venezuela, para comprender las innovaciones en materia legislativa del actual Gobierno es necesario reconocer que se está construyendo un nuevo modelo de país: «La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las más avanzadas del mundo en materia ambiental. Desde la exposición de motivos está explícitamente expuesto que el ambiente es el eje transversal de la Carta Magna, y el resto del articulado también lo refleja. Por ejemplo, menciona al ambiente como una de las limitaciones para ejercer actividades lucrativas, torna obligatoria la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo, establece al ambiente como modelo económico, lo admite para construir las bases de una integración latinoamericana y caribeña, e incluso declara al ambiente como causa para decretar estado de excepción».

De los Ríos desestimó que la concienciación sea el punto de partida para generar cambios estructurales en materia ambiental. «Creo que se debe empezar por la ley, porque si esperamos que tomen conciencia las autoridades judiciales, administrativas y el resto del colectivo, no lograremos nada». Explicó que la sanción de nuevos documentos legales servirá para romper —por algún lado— con los círculos viciosos: «El derecho es producto de cambios pero también puede ser un factor de cambio, que es lo que estamos experimentando».

«Lo ambiental dejó de ser asunto de hippies»

Las organizaciones ambientalistas han servido de vínculo entre el colectivo, los gobiernos de turno y el sector privado. En la actualidad es incierto el número de ONG ambientalistas en Venezuela. De acuerdo con un informe del año 1996, emitido por el entonces Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, existían 520 organizaciones ambientalistas: un promedio de veinte por estado y con mayor concentración en el Distrito Capital. Entre las que más reconocimiento y tiempo tienen destacan: Fundación Tierra Viva, Provita, Fundación La Salle, Econatura, Fundación para la Defensa de la Naturaleza (Fudena), Sociedad Audubon de Venezuela y, de creación más reciente, Vitalis.

Provita surgió en los años ochenta como una asociación civil basada en el trabajo voluntario; actualmente se financia con recursos mixtos y aporte internacional. Como explica su presidente, Franklin Rojas-Suárez: «Comenzamos tras aplicar un programa de gestión para instituciones sin fines de lucro que dictó el IESA, financiado por un convenio con Fundayacucho. Luego nos formó Fundación Natura, de Ecuador; en adelante, Provita definió su perfil y su crecimiento. Hoy nos centramos en conservación ambiental en su sentido más amplio; esa es nuestra misión. El tiempo nos demostró que mantener programas y proyectos de ejecución directa es costoso y difícil porque comprende, entre otras cosas, personal, transporte e investigación. También entendimos que si no hay soluciones desde la base, a partir de la gente, es muy difícil lograr cambios y ver resultados positivos».

Provita centra su gestión en conservación basada en evidencias para áreas urbanas, protegidas y rurales. Mantiene una base de datos de las especies amenazadas en Venezuela y produce los libros rojos de las especies en riesgo de extinción, que son referencia para medir algunos de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio de la ONU para el año 2015. El *Libro rojo de la fauna 2008* inspiró la más reciente emisión de billetes hecha por el Banco Central de Venezuela, lo que ha permitido que la población se familiarice con las especies amenazadas o en riesgo de desaparecer. Entre sus planes a mediano plazo, Provita aspira a estimular en distintas comunidades la fabricación de «productos verdes» (como cestas o mermeladas), que empleen materias primas propias y exclusivas de cada zona.

Al ser consultado sobre el desafío de la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos y programas de Provita, Rojas-Suárez expresó: «Hemos cometido errores y hemos aprendido de las experiencias buenas y malas. Como ONG ambiental debemos aprender a gestionar nuestros recursos y a hacer más conservación urbana cercana a la gente. Debemos también creer más en los campesinos e indígenas y trabajar de la mano con ellos, que las respuestas salgan de ellos, porque son los que conocen su realidad y sus circunstancias, que sean los actores del desarrollo del modelo. Nuestro papel como ONG es apoyarlos y guiarlos».

Durante años, la conservación y el componente social caminaron por sendas diferentes. Un buen ejemplo es el caso del parque nacional, como espacio sin habitantes. «Hemos comprendido que el hombre es parte del problema y parte de la solución. Esto ha sido positivo, porque nos permitió

Rojas-Suárez (Provita): «Recomiendo al Gobierno tomar al ambiente como una línea prioritaria que no sólo dependa del Ministerio del Ambiente. Sugiero que cada ministerio tome en su estructura el asunto ambiental como una línea de desarrollo»

reconocer que la solución está en la gente. Podemos hacer guardería ambiental o redactar leyes, pero la inversión necesaria para avanzar es muy grande, mientras que el efecto es mayor si educamos y formamos a las comunidades, porque el resultado es que la gente decide y administra su territorio sustentablemente; se les muestran los beneficios y se les enseña que son parte de la solución», afirma Rojas-Suárez.

«Lo ambiental dejó de ser asunto de hippies, universitarios, políticos o científicos. Como consecuencia del calentamiento global lo ambiental pasó a formar parte de la vida diaria, y convoca a todas las profesiones a actuar», destaca Rojas-Suárez. «Aunque existen dudas sobre la gestión ambiental de este Gobierno, creo que ha tenido grandes aciertos; algunos, incluso, muy pocos conocidos, como eliminar la minería en el río Paragua, en el estado Bolívar, que comprometía la generación de electricidad y el suministro de agua dulce, pues ese río aporta 45 por ciento del agua de la represa del Guri».

Otro logro del Gobierno fue reconocer los derechos de los indígenas, pueblos que tienen un modelo de desarrollo compatible con el ambiente, a los que —por fin— se les ha dado oportunidad para plantear sus modelos propios.

Pero, al lado de estos avances, Rojas-Suárez cree que el Gobierno ha ocasionado retrocesos en la protección ambiental, el control y el tráfico de especies (no hay un centro de rehabilitación de los ejemplares que son decomisados y, como consecuencia, van a parar a cualquier lado), y no se reconoció la gestión de algunos hatos llaneros que fueron modelos privados de conservación, cuya efectividad estuvo por encima de la

de cualquier parque. «El Ministerio del Ambiente cuenta con profesionales de primera línea que tratan de hacer una buena gestión. No ha sido eliminado y tiene presupuesto, pero creo que el Gobierno todavía ve el asunto ambiental como una niña fea y no como un tema central del desarrollo. Recordemos que somos un país rico en agua dulce y en biodiversidad; quizás como tenemos tanto no advertimos problemas que están pasando en otros países, como la desertificación y la escasez de agua. Recomiendo al Gobierno tomar al ambiente como una línea prioritaria que no sólo dependa del Ministerio del Ambiente. Sugiero que cada ministerio tome en su estructura el asunto ambiental como una línea de desarrollo».

Gente, comunicación y ambiente

Antes de crear Vitalis, sus fundadores analizaron qué se estaba haciendo en Venezuela en materia ambiental, qué hacía falta y de qué manera se podía contribuir a la conservación ambiental. Querían que su labor fuese novedosa, sin hacer investigación aplicada al manejo de animales o flora, sino concentrarse en la gente y movilizar actores hacia metas concretas. «Nos pusimos a trabajar y logramos que varios ex directores de otras ONG se incorporaran al proyecto», afirma su presidente, Diego Díaz Martín. «Empezamos a darle

Díaz Martín (Vitalis): «Hemos tenido experiencias con empresas de servicio y grupos comerciales en la evaluación de sus instalaciones y la promoción de mejores prácticas ambientales»

forma a la idea: una unidad de gestión que abordaría el tema de los recursos naturales y el desarrollo sustentable sin fines de lucro pero, al mismo tiempo, sin fines de pérdida. Nos centramos en mantener los objetivos a largo plazo, con autonomía, independencia y criterios técnicos propios, y que los actores valoraran sus acciones».

A comienzos del año 2000 realizaron las primeras reuniones de trabajo y fundaron Vitalis, que en latín significa «todo lo que tiene vida». «Nos interesaba revertir el enfoque antropocéntrico de muchas organizaciones, orientado a defender al hombre, con todo lo que significa la dimensión social, económica y su dependencia del entorno para sobrevivir; pero también el otro extremo, la visión biocéntrica, concentrada en la protección de los recursos naturales, con la que los seres humanos están muy poco vinculados. Estas dos posiciones —la biocéntrica y la antropocéntrica— nos dieron la idea de crear una organización que se dedicara a todos los seres vivos», afirma Díaz Martín.

«También tuvimos claro que no queríamos una ONG de biólogos y ecólogos, porque ya lo habíamos hecho», destaca el presidente de Vitalis. «Todos los que conformamos a Vitalis venimos de otras ONG. Queríamos diferenciarnos de otras ONG y analizamos en qué estaban trabajando y cuáles eran los temas. Nos dimos cuenta de que la comunicación y el trabajo con los medios no era muy abordado; al menos no profesionalmente».

Vitalis desarrolla una agenda en educación, comunicación y ambiente. En términos generales, forma ciudadanos ambientalmente responsables en una dimensión diferente y en escala distintas: «Promovemos la ciudadanía global, que consiste en pensar no sólo en los problemas que te afectan directamente, sino en aquellos a los cuales estás vinculado y que tienen un efecto más fuerte, como el cambio climático y el debilitamiento de la capa de ozono, entre otros».

Díaz Martín subraya con orgullo que la página de Vitalis en Internet está en la posición 700.000 de más de cincuenta millones de sitios virtuales en el mundo. Además, la ONG ha producido programas de radio, series de televisión y una red de comunicadores sociales. Adicionalmente desarrolla una agenda de derecho ambiental y política: «Tenemos un grupo de trabajo que coordina las jornadas anuales de derecho ambiental, promueve foros virtuales sobre temas clave, elabora documentos y los presenta a la Asamblea Nacional». Toda la información generada a partir de esta agenda es publicada en Internet y permite que el usuario tenga a mano las más recientes informaciones en materia legislativa ambiental.

Hoy Vitalis es una referencia para los medios de comunicación. Entrega información científica «masticada», con respuestas sobre temas como ecoeficiencia, y una cultura administrativa que guía al empresario para que sea responsable con la sociedad y para que su negocio sea más competitivo mediante la adaptación y la adecuación de los sistemas productivos a las necesidades del mercado y del ambiente. «Hemos desarrollado principios ecoeficientes. Realizamos cinco seminarios anuales sobre producción limpia. Hemos tenido experiencias con empresas de servicio y grupos comerciales en la evaluación de sus instalaciones y la promoción de mejores prácticas ambientales. Las empresas aprenden que la ecoeficiencia es rentable porque mejora su desempeño ambiental, disminuye la generación de residuos, agiliza los procesos de producción, ahorra recursos naturales y dinero, mejora la imagen de la empresa y permite una mejor relación con los clientes, trabajadores y autoridades ambientales».

Como estímulo a la gestión ambiental responsable de empresas, organismos oficiales y medios de comunicación, esta ONG ambientalista otorga premios en materia de gestión. «Es una manera de motivar, porque en Venezuela cada vez son más escasos los reconocimientos a la gestión ambiental». Cuentan con un equipo multidisciplinario: contadores, administradores, abogados, periodistas, biólogos, ecólogos, ingenieros ambientales, economistas ambientales y, además, una brigada ambiental juvenil integrada por estudiantes de diversas carreras universitarias.

En cuanto a los efectos de la Ley de cooperación internacional, Díaz señala: «Nuestro trabajo se realiza con pocos recursos económicos, pero lo hacemos con mucha eficiencia y transparencia. Tenemos una junta directiva que vela por eso y garantiza que los recursos que recibimos sean utilizados para los fines que se han previsto. El dinero que manejamos proviene de membresías individuales y corporativas, y de aportes anuales especiales. Recibimos financiamiento por proyectos con organismos públicos, empresas privadas, embajadas y alianzas estratégicas. Además, emitimos un informe anual. En ese documento no evaluamos gobiernos: evaluamos al sector ambiental. Para esa tarea se hace un trabajo de campo y consultamos expertos de todo el país. En el informe del año 2008 participaron 144 especialistas que aportaron su visión sobre los problemas ambientales. Vale decir que en la actualidad no existe un balance ambiental que llene las expectativas del público como lo hace este informe. Se ha convertido en referencia para ONG, organismos públicos y medios».

«Apostamos al arraigo de los venezolanos a su geografía y su cultura»

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales cuenta con algo más de medio siglo de existencia. «Durante ese tiempo asumimos la responsabilidad de ofrecer oportunidades rea-

lizadas y realizables para afrontar el desafío del aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales», afirma su director nacional de Investigación, Daniel Lew. «Desde nuestra creación nos adentramos en un territorio complejo, del cual no es posible salir sin propuestas concretas y factibles. Por eso apostamos al arraigo de los venezolanos a su geografía y su cultura, al progreso social comunitario sobre la base de sus propios recursos naturales, y a la preservación de esos recursos como única oportunidad para ofrecer una vida digna a esta y las futuras generaciones».

Para Lew, «las ONG ambientales en Venezuela han estado signadas por una limitada área de actuación, según sus posibilidades; aun así, los aportes de estas organizaciones han sido muy significativos. El problema es que el tema ambiental tiene muchos elementos, como la contaminación, la pérdida de ecosistemas o la existencia de especies amenazadas, y cuando sólo puedes resolver uno de los elementos es muy poco lo que puedes hacer por el ambiente».

«La Fundación La Salle ha tenido una impronta que la ha diferenciado de otras ONG ambientales, porque hemos afrontado sin complejos el dilema entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales», sostiene Lew. «Asumir el discurso de sólo defender el ambiente, sin ver que los seres humanos forman parte del sistema, es olvidarse de un elemento muy importante, porque los seres humanos tienen que vivir de los recursos que les ofrece la naturaleza. El gran desafío es cómo aprovechar esos recursos».

Para lograr estos objetivos, la Fundación ha asociado sus centros de investigación en materia ambiental con institutos de formación técnica e institutos universitarios tecnológicos que forman personas para el aprovechamiento de los recursos locales y para fomentar el arraigo de la gente a sus comunidades, su geografía y su cultura. «Sin duda este es un aporte que hace de la Fundación La Salle una mina. Si sólo replicamos una vez esta experiencia de modelo exitoso de desarrollo local popular en el interior del país, entonces ha valido la pena que existamos, porque significa que estamos haciendo un aporte al desarrollo del país y de la gente».

«Estamos situados en las comunidades más pobres, en los lugares que la gente menos frecuenta. Es evidente la cercanía de la Fundación con la gente y las instituciones gubernamentales locales que operan en esos lugares, como alcaldías, consejos comunales y cooperativas. Las comunidades saben que para nosotros la educación es el punto de partida. Los muchachos salen de nuestras instituciones con una herramienta de trabajo para su desarrollo y el de su familia, su comunidad y su entorno. Es una formación vinculada con el propio quehacer de su región».

Fundación La Salle es una organización grande: cuenta con casi doce mil alumnos entre escuelas técnicas, institutos universitarios y educación no formal, varios centros de investigación y más de 1.500 empleados. Esta estructura requiere una ingente cantidad de recursos. «Tenemos un gran reto: superar una gran crisis financiera, parte de una circunstancia de la historia reciente de la institución que fue pública entre los años 2003 y 2005, actualmente solventada. Pero los aspectos jurídicos terminan dejando secuelas y ruidos que generan mucha desconfianza. El reto es recuperar ese valioso tiempo que se nos hizo perder. Lo superaremos en la medida en que los espacios de encuentro con los diversos organismos reconozcan que tienen en la Fundación La Salle un aliado natural».

Los aportes fundamentales provienen del Ministerio de Educación Superior, gracias a un convenio con la Asociación

Venezolana de Educación Católica, de ingresos propios y de otras diversas fuentes, en su enorme mayoría nacionales, como el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, y la Ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. «La experiencia que Fundación La Salle puede poner al servicio del país ha sido exitosa. Hoy tiene la oportunidad de multiplicar y masificar ese conocimiento en materia de desarrollo local, piscicultura, pesca y agropecuaria. Estamos buscando la vía para hacer que nuestras infraestructuras (que, creemos, están en lugares estratégicos) profundicen sus objetivos y sean más estratégicas, gracias a la ejecución de programas con el Gobierno nacional».

Ante la posibilidad de que la legislación sobre cooperación internacional los afecte, Lew sostiene: «La Fundación mantiene una fluida comunicación con los organismos del Estado. Tenemos una gran receptividad con nuestro principal interlocutor, el ministro del Educación Superior, Luis Acuña. Contamos con un representante del Ministerio en nuestra junta directiva. Con la Dirección de Diversidad Biológica mantenemos estrechas relaciones al igual que con otras instancias. En consecuencia, tenemos la clara percepción de que

Lew (Fundación La Salle): «Tenemos la clara percepción de que el único interés del Gobierno es cooperar. Sólo esperamos que cada día se incremente la cooperación»

el único interés del Gobierno es cooperar. Sólo esperamos que cada día se incremente la cooperación; especialmente en nuestros proyectos experimentales en materia de seguridad alimentaria y desarrollo tecnológico, propuestas que ya están probadas, que tenemos la certeza de que son exitosas, pero que necesitan un impulso que sólo el Gobierno puede dar».

El reto de las ONG

Gestionar el ambiente está muy lejos de ser algo fácil, pues supone manejar la relación entre dos sistemas (las comunidades humanas y la naturaleza) que, aun cuando se consideren como partes de una sola realidad, se regulan en forma totalmente diferente.

El diputado Roy Daza afirmó recientemente para *Debates IESA* que se ha hecho una pausa en la discusión del proyecto de la Ley de cooperación internacional: «Escribiré el articulado y convocaremos para su deliberación en 2010. Durante este año he recibido a varias ONG que se han acercado preocupadas. Hemos aclarado dudas y se han ido satisfechas, y seguimos dispuestos a recibir las».

El reto de las ONG ambientalistas es desarrollar pericias para «olfatear» las necesidades del entorno nacional e internacional y, en consecuencia, reformularse. En lo que concierne al proyecto Ley de cooperación internacional, estas organizaciones deben aportar elementos para la estructura de su articulado y percibirla como un instrumento para mejorar su gestión. Por su parte, el Gobierno debe preguntarse si ha valido la pena la existencia de las ONG y si su desaparición sería un precio aceptable para garantizar el desarrollo sustentable de Venezuela. ■

Alba Marina Gutiérrez

Periodista especializada en temas de ambiente y gestión de riesgo ambiental. Miembro de la red «Periodismo por el Cambio Climático», impulsada por la Embajada Británica en Venezuela.